



Violación a los derechos humanos de las/los adolescentes en Chile

Informe Sombra

Octubre 2007

RECONOCIMIENTOS

El presente Informe Sombra sobre la violación a los derechos humanos de las / los adolescentes en Chile fue coordinado por Yolanda Orozco como trabajo voluntario para la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC). El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) de Chile, a través su representante Juan Hernandez contribuyó para la realización de este informe.

Para ser presentado ante el Comité de los Derechos del Niño con motivo de la consideración del Reporte del Estado de Chile, con arreglo al artículo 12 del Protocolo Facultativo de La Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, La Prostitución Infantil y La Utilización de Niños en la Pornografía

47° Período de Sesiones

Enero - Febrero 2008

Introducción

La República de Chile firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño el 26 de Junio de 1990 y la ratificó el 13 de Agosto de 1990. Asimismo, ratificó los Protocolos Facultativos referentes a la participación de niños en los conflictos armados (21 de julio de 2003) y el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía el 6 de febrero de 2006. Con todo ello asumió el compromiso de incorporar en todas sus políticas y de trasladar a su legislación interna las disposiciones y los principios establecidos por la Convención y los Protocolos Facultativos mencionados. A principios del año 2007, Chile realizó la presentación de su tercer informe periódico, el cual fue evaluado durante el 44° Período de Sesiones del Comité de CRC. El examen del Informe tuvo lugar en sus Sesiones Plenarias 1218 y 1219 (CRC/C/SR.1218 y CRC/C/SR.1219) celebradas en Ginebra el 26 de enero y 2 de febrero de 2007 respectivamente, luego de lo cual el Comité emitió sus Conclusiones Finales (CRC/C/CHL/3). Para la elaboración del presente Informe, partimos de tales Conclusiones Finales y del Reporte Inicial presentado por Chile (CRC/C/OPSC/CHL/1), que -será considerado en el actual Período de Sesiones (Nro. 47)- de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 1° del Artículo 12 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a La Venta de Niños, la Prostitución Infantil y La Utilización de Niños en La Pornografía.

IGLHRC, “Comisión Internacional de los Derechos humanos de Gays y Lesbianas” trabajando en cooperación con el MOVILH, “Movimiento de Integración y Liberación Homosexual” de Chile, ha confeccionado el presente Informe Sombra, con la intención de que la información y las observaciones que se presentan en él sirvan para alcanzar una mayor y mejor protección, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas GLTTBI que viven en la Republica de Chile. Esperamos que este Informe pueda ser de utilidad al Comité de los Derechos del Niño y resulte fecundo como material para los futuros esfuerzos en la promoción de los Derechos del Niño.

Resumen Ejecutivo

El Código Penal vigente en Chile fue dictado el 12 de noviembre de 1874. Hasta 1999 a través de su artículo 365 penalizaba –bajo la figura de sodomía- las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo, se efectuaran estas en lugares públicos o privados y aunque las mismas fueran de mutuo consentimiento. Durante ocho años el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) de Chile luchó por la eliminación de esa norma, por cuanto esta permitía considerar a las relaciones sexuales entre hombres adultos como un delito, cristalizando una vulnerabilidad legal que daba paso a diversos atropellos, como sucedía –por ejemplo- con las detenciones policiales. Para ello se consiguió el respaldo por escrito de parlamentarios de diversas tendencias políticas y se demandó al Estado Chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Ley 19.617 promulgada el 2 de Julio de 1999 por el Congreso Nacional de Chile, introduce modificaciones en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal y en otros Cuerpos Legales en materias relativas al delito de violación, según ha publicado la Biblioteca de dicho Congreso. El punto Nro. 10 de la ley 19.617 modifica finalmente el artículo 365 del Código Penal, lo cual significó un importante triunfo sobre la discriminación, ya que las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo dejaron de ser consideradas un delito a partir de entonces. Sin embargo, la enmienda continua siendo discriminatoria, por cuanto en la actualidad el artículo 365 indica que: *“El que accediere carnalmente a **un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio**”*.

El trato discriminatorio y la violación de derechos que sufren y han sufrido los/las jóvenes homosexuales en Chile, ha sido reportada ante la ONU en diversas oportunidades, a través de informes presentados por el MOVILH. Entre otras derivaciones, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU), expresó, tanto durante la celebración de las Sesiones Plenarias 1218 y 1219 como en sus Observaciones Finales del 23 de Abril del 2007,¹ su preocupación por la existencia de esta normativa. En específico, el Comité manifestó su preocupación *“porque las relaciones homosexuales, inclusive entre personas menores de 18 años de edad, se sigan penalizando, lo que supone una discriminación sobre la base de la*

¹CRC/C/CHL/3.

preferencia sexual".² Fue en ese sentido que el Comité recomendó al Estado de Chile que *"intensifique sus esfuerzos para examinar, supervisar y hacer cumplir la legislación que garantice el principio de no discriminación y el pleno cumplimiento del artículo 2 de la Convención y que adopte una estrategia pro-activa e integral para eliminar la discriminación por motivos de género, étnicos, religiosos o por cualquier otro motivo y contra todos los grupos vulnerables en todo el país"*.³

Asimismo, durante la sesión plenaria 1218, el Comité señaló que *"sancionar las relaciones sexuales con consentimiento mutuo entre jóvenes del mismo sexo es una medida discriminatoria, que ignora el hecho de que los adolescentes están en la exploración de su identidad sexual"*.⁴ Por otra parte, recomienda al Estado que *"promueva y garantice el acceso a los servicios de salud sexual y de salud reproductiva para todos los adolescentes, en particular educación sexual y reproductiva en las escuelas y en la atención de la salud, () con servicios confidenciales y teniendo en cuenta la Observación General Nro. 4"*.⁵ El Comité solicitó expresamente al Estado Chileno que en su tercer reporte de Derechos Humanos, previsto para el 12 de septiembre del 2012, *"incluya información específica sobre las medidas y los programas pertinentes a la Convención sobre los Derechos del Niño que haya aplicado para ofrecer una protección especial a los grupos vulnerables"*.

El primer caso conocido públicamente de aplicación del artículo 365 tras la Reforma Procesal Penal se concretó el 10 de agosto del 2007 cuando el trabajador J.A.P.L, de 47 años, fue condenado en Antofagasta (II Región del Norte de Chile) a 41 días de presidio remitido por tener relaciones sexuales con un menor al que sólo le faltaban 12 días para cumplir la mayoría de edad. Ambos se habían conocido a través de un Chat y se habían visto en ocasiones previas. A pesar de que el menor aclaró ante la justicia que tuvo relaciones sexuales sin ser presionado y por iniciativa propia, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta decidió de todas formas sancionar al mayor de edad. Conviene precisar que inicialmente el fiscal de Delitos Sexuales del Ministerio Público, Cristián Aguilar, había pedido una pena de 541 días de presidio al Tribunal

² CRC/C/CHL/CO 3, Párrafo 29.

³ CRC/C/CHL/CO 3, Párrafo 30.

⁴ CRC/C/SR 1218.

⁵ CRC/C/CHL/CO 3, Párrafo 56.

de Juicio Oral. Tal pena, a juicio del fiscal, se explica porque el mayor de edad *"habría corrompido la moral sexual del menor. Si bien no produjo un daño inmediato podría ocasionársele con posterioridad"*. Finalmente la Defensoría Penal Pública, representada en el caso por Cristina Gallegos, logró rebajar la pena a 41 días de presidio remitido. Con todo, en Chile no existen datos públicos transparentes que permitan conocer los detalles de este caso y/o estadísticas sobre otras aplicaciones del artículo 365, pues las autoridades no cuentan con catastros actualizados y específicos sobre ello.

Es de destacar que en el último Reporte presentado por el Estado Chileno ante el Comité, se incluye explícitamente a la “sodomía” dentro de los “delitos que afectan la libertad o indemnidad sexual de niños y niñas” junto con la violación, el incesto, el estupro, el abuso sexual, la pornografía infantil y la prostitución de niños y niñas.⁶ Del mismo modo, **en el Reporte Inicial sobre la aplicación del Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, La Prostitución Infantil y La Utilización de Niños en La Pornografía,**⁷ en su párrafo 35, se hace alusión al artículo 365, presentándolo como una medida de protección hacia los menores.

Resulta una contradicción que se catalogue como medida protectora una disposición que atenta directamente contra los derechos a la salud y al desarrollo de las /los adolescentes; derechos que incluyen el desenvolvimiento pleno de la sexualidad -contemplando la orientación sexual- y la construcción de su identidad.⁸ Con ello se legaliza, además, la discriminación en base a la orientación sexual, lo cual resulta una gravísima falta a los principios de la Convención.

A pesar de las recomendaciones del Comité antes citadas, en relación a la perpetuación de medidas discriminatorias en materia de sexualidad, el Estado Chileno y sus representantes no han mostrado disposición a modificar su postura hasta el momento, al sostener una medida que refuerza la discriminación y viola los derechos sexuales y la libertad de conciencia de los adolescentes.

⁶ CRC/C/58, párrafo 88, puntos 109 y 116.

⁷ CRC/C/OPSC/CHL/1.

⁸ CRC/GC/2003/4; Puntos 2 y 6.

Violaciones Sustantivas a la Convención

Principios generales (Artículos 2, 3, 6, 12), El artículo 365 del Código Penal de la República de Chile viola –entre otros- los 4 principios generales en los que hace hincapié el Comité y que condicionan la aplicación de los demás artículos de la Convención, a saber los artículos 2, 3, 6 y 12, que comprenden el derecho a la no discriminación, el Interés superior del niño, el derecho a la vida y el derecho a ser escuchado y respetado en sus opiniones.

Artículo 2 (Derecho a la no discriminación)

El artículo 2 expresa que los derechos del niño se respetarán sin discriminación alguna y compromete al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar que los mismos se vean protegidos contra toda forma de discriminación, sea cual fuere su origen.

El problema en el caso del Artículo 365 es que el propio Estado ha instalado una medida discriminatoria, al señalar como delictiva una práctica sexual que en si misma no implica violencia, violación, estupro ni abuso sexual de ninguna clase. Por si quedaran dudas en cuanto a qué se penaliza con el mencionado artículo, Ello se deduce claramente a partir de los contenidos del mismo Código Penal, ya que:

El artículo 361 penaliza la violación hacia personas mayores de 14 años

El artículo 362 penaliza la violación / estupro hacia personas menores de 14 años

El artículo 363 penaliza el estupro hacia personas mayores de 14 años

El artículo 366 penaliza el abuso sexual sin acceso carnal hacia personas mayores de 14 años

El artículo 366 bis penaliza el abuso sexual sin acceso carnal hacia personas menores de 14 años

Los artículos 366 quarter y 366 quinquies penalizan diferentes modalidades del abuso sexual hacia personas menores de 18 años.

Teniendo en cuenta, además, que la edad estipulada en Chile para el consentimiento sexual es de 14 años, podemos concluir que el acto que está siendo considerado delito sexual en el artículo 365 es la penetración anal, realizada entre dos personas del mismo sexo, donde al menos una de ellas es un/una adolescente de entre 14 y 18 años. En lo concreto ello significa que las relaciones sexuales entre personas homosexuales están penadas si involucran a adolescentes menores de 18 años. Obviamente su vigencia implica la vigencia de una disposición que censura, inhibe y

culpabiliza, por cuanto las/los jóvenes adolescentes con orientación homosexual serían considerados delincuentes si ejercen su derecho a la sexualidad. La norma perfectamente posibilita –por ejemplo- sancionar las relaciones sexuales homosexuales entre una persona de 19 años y otra de 17. Por otro lado, ello tiene consecuencias más allá de la legislación, ya que refuerza creencias e ideologías que atraviesan y han atravesado por décadas a amplios sectores de la sociedad chilena. La figura de “sodomía” tiene fuertes connotaciones religiosas y condenatorias, ya que –según la definición encontrada en el diccionario de la lengua española Espasa Calpe (2000) significa: “concúbite entre varones o contra el orden natural”. El origen del vocablo proviene de Sodoma, ciudad de Palestina que, según el relato de la Biblia, fue destruida por Dios como castigo al pecado de sus habitantes. Por lo tanto, el artículo 365 las relaciones entre personas del mismo sexo serían pecaminosas o fuera del orden natural, precepto que la legislación chilena continúa sosteniendo cuando se trata de una persona adolescente. Desde este punto de vista, la disposición responde a mandatos religiosos dentro de un Estado que se ha definido como laico.

El principio de no discriminación está consagrado dentro de la Constitución de ese país. Sin embargo, en la práctica, la no discriminación hacia las llamadas “minorías sexuales” no está realmente instituido. Encontramos un ejemplo de ello en los 18 casos de estudiantes gays y lesbianas que han sido víctimas de expulsiones, burlas, hostigamientos, sanciones y chantajes en establecimientos educativos de enseñanza media. Dichos casos de discriminación han sido registrados por el MOVILH entre los años 2002 y 2006, junto con otros 8 casos de abandono y/o expulsión familiar de adolescentes gays, lesbianas y transexuales. Si bien el MOVILH consiguió que el Ministerio de Educación incluyera las categorías de “orientación sexual” y “género” como categorías protegidas, dentro del Plan Nacional de Educación Sexual y Afectividad en el año 2005, tal protección no se respeta en lo concreto.⁹ La sociedad chilena tiene un fuerte perfil conservador de los valores y normas establecidos desde los sectores religiosos y políticos liberales, que se traduce en la estigmatización de toda práctica, conducta o discurso que trasgreda los parámetros de la heterosexualidad. En efecto, los preceptos y la moral católica, sostienen una concepción de la sexualidad alejada de los parámetros científicos actuales, ya que la reduce a una naturalización del modelo heterosexual, al servicio de la reproducción. En este sentido, el

⁹ Informes Anuales de “Derechos Humanos de Minorías Sexuales Chilenas”, MOVILH.

Estado está frente a un enorme desafío que deseamos pueda atravesar. Por otra parte, al haber derogado la disposición que penalizaba la sodomía entre dos personas del mismo sexo adultas, se está estableciendo un desnivel entre lo dispuesto para adolescentes por una parte y para las personas adultas por otro, dejando de lado que en ambos casos se trata de sujetos que merecen los mismos derechos y garantías en tanto sujetos de derecho. Al respecto, nos remitimos a la Observación General Nro. 10 (2007) sobre “Los derechos del Niño en la Justicia de Menores”,¹⁰ donde, el Comité –en función de garantizar la igualdad de trato de los adolescentes y adultos ante la ley-, menciona el artículo 56 de las Directrices de la RIAD que dispone: "A fin de impedir que prosiga la estigmatización, la victimización y la criminalización de los jóvenes, deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un joven".¹¹

Artículo 3, 6 y 12. Interés superior del niño, derecho a la vida y Derecho a ser escuchado y respetado en sus opiniones.

El interés superior del niño constituye la consideración primordial de niñas, niños y adolescentes en todas las medidas que los conciernen y en todos los ámbitos en que se desarrollan: social, institucional y familiar; se trata de un interés privado y a la vez social. Ello se traduce en la consideración de que los niños tienen un derecho intrínseco a la vida, que incluye la promoción de su vitalidad y de su desarrollo en la máxima medida posible; entendiendo desarrollo “con un sentido holístico que abarca los aspectos físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social”¹² sin discriminación de ninguna clase. El artículo 12 sostiene que el Estado debe garantizar el respeto por las opiniones del niño, su derecho a expresar estas opiniones libremente y a que estas sean tenidas en cuenta, sobre todo en los asuntos que le atañen, además, en función de su edad y de su madurez. El mencionado artículo 365 no respeta la condición de las/los adolescentes como sujetos de derecho ni tiene en cuenta su potencial capacidad cognitiva, de pensamiento crítico y creativo. El mismo responde a una concepción tutelar, que aún sigue vigente en la jurisprudencia de Chile como de tantos otros países de América Latina, donde la voluntad del adolescente no es tomada en cuenta la mayoría de las veces, sino que es sustituida por la de sus representantes

¹⁰ CRC/C/GC/10.

¹¹ CRC/C/GC/10, Apartado III, punto 8.

¹² CRC/GC/2003/5.

legales. En el caso del mencionado artículo 365 ello se traduce en que el mismo Estado está asumiendo una actitud tutelar, dejando de lado el respeto al derecho de las/los jóvenes homosexuales a manifestarse y a discernir sobre una de las cuestiones básicas que atañen directamente a su persona como es su sexualidad. Desde la perspectiva tutelar – paternalista, a menudo se confunde y se homologa legalidad con disciplina y moralidad. Ello responde a cuestiones tradicionalistas e históricas que resultaría provechoso identificar y deslindar, -en esta como en tantas otras situaciones- ya que ello posibilitaría separar lo transitorio de lo que sustenta vigencia estructural, para que la ley y la ética retomen su estatuto de validez universal, más allá de la moral sujeta a contingencias históricas.

Derechos y libertades civiles

Artículo 16 Derecho a la privacidad y al respeto por la dignidad

El artículo 16 sostiene que “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. Sin embargo, el artículo 365 – pretendiendo ser una medida protectora- paradójicamente entraña un ataque directo a la privacidad en tanto penaliza una práctica sexual que –como tal- pertenece al ámbito de la intimidad. Por otra parte, con el acto de penalizarla (sólo) cuando ocurre entre “dos personas del mismo sexo” se está degradando un aspecto de la personalidad que –especialmente en el caso de las / los adolescentes- puede conducir a graves

traumatismos desde el punto de vista psíquico y moral, en tanto pone en tela de juicio un aspecto básico como lo es la orientación sexual, en donde se conjugan subjetividad y corporalidad.

Artículo 24: Derecho a la Salud

El artículo 24, junto con el 6to. garantizan el derecho a la salud y al desarrollo, ambos comprendidos desde un punto de vista integrador en un sentido positivo. Tal como se consigna ampliamente en las Observaciones Generales sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención de los Derechos del niño,¹³ la adolescencia es un período de la vida

¹³ CRC/GC/2003/4.

caracterizado por profundas transformaciones que -entre otras cuestiones- conduce a la madurez sexual, a la adquisición gradual de la capacidad para asumir comportamientos y funciones de adultos, y donde se plantean nuevos desafíos como es el de la “adquisición de una identidad personal y la gestión de la propia sexualidad”. Que la/el adolescente crezca y desarrolle una subjetividad creativa; que se construya o no un psiquismo saludable, que pueda alcanzarse el famoso bienestar y equilibrio bio-psico-social, que la OMS caracteriza como “salud” depende – en gran medida- de las “condiciones ambientales y funcionales” que rodean y atraviesan la vida de la/el adolescente. El artículo 365 a la letra, tanto como sus alcances y la ideología que ha permitido su promulgación implican un insoslayable impacto sobre la subjetividad de las/los adolescentes que se identifican dentro del espectro LGTTBI, en tanto implica estigmatización, culpabilización, descalificación y/o patologización de aquello que se está constituyendo como orientación sexual y/o identidad de género. Este impacto incide en las posibilidades de crecimiento subjetivo, por lo tanto atenta contra su bienestar e incide en su devenir como ser humano. Asimismo se está violando allí el derecho a ese pleno desarrollo bio-psico-social que antes mencionamos, en tanto es sabido que las prohibiciones que recaen sobre aspectos básicos de la subjetividad, resultan violentas y conducen a inhibiciones y a trastornos que condicionan la relación de la persona consigo misma, con el entorno y con la sociedad toda.

Sugerencias y Recomendaciones

Solicitamos al honorable Comité sobre la Convención de los Derechos del Niño a que incentive y recomiende al Estado Chileno a:

- Realizar una nueva revisión de su aparato judicial en cuanto a la protección de los derechos de las y los adolescentes de Chile, y -en el marco de las reformas legislativas, administrativas e institucionales esperables en este sentido- **proceda a derogar el art. 365 del Código Penal**, tomando en cuenta las recomendaciones y comentarios del Comité y de acuerdo al artículo 4 correspondiente a las medidas generales de Aplicación de la Convención.
- Reforzar la capacitación dirigida a los miembros del Poder Judicial sobre las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, así como la importancia y vigencia de los demás Tratados y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile, en cuanto a los alcances de su aplicación por parte de

los tribunales de justicia, especialmente en el sentido de respetar el interés superior de las /los adolescentes, sin discriminación de ninguna índole.

- Promover desde las instituciones educativas, los medios de comunicación y a través de programas de concientización -dirigidos a políticos, jueces y demás agentes y funcionarios públicos- la progresiva instalación de una mirada igualitaria en cuanto al ejercicio de derechos y al establecimiento de garantías para las y los adolescentes sin distinción de ninguna índole, aspirando a la integración de la diversidad en materia de género y sexualidad en función de posibilitar el ejercicio de las libertades y el respeto hacia las personas GLTTBI.
- Garantizar el derecho a la dignidad y a la salud de las y los adolescentes, como sujetos de derechos y de personas en desarrollo. Para lo cual encontramos imprescindible que el estado Chileno haga un amplio y minucioso seguimiento de los planes ya encaminados en este sentido y esté atento a la transformación de las políticas públicas en función de asegurar la integridad física, sexual, psíquica y moral, especialmente a los grupos actualmente vulnerables como las/los adolescentes GLTTBI. Cabe recordar aquí que, tal como se señala en el apartado IV de la Observación General Nro. 5 sobre las Medidas Generales de la aplicación de la Convención, “el principio de no discriminación no impide que se adopten medidas especiales para disminuir la discriminación”.¹⁴
- Propiciar en todas las instancias judiciales –especialmente en los juzgados de menores- a dar lugar y a respetar la opinión y el propio registro de las/los adolescentes a fin de evitar que sigan siendo vulnerados en sus derechos, de acuerdo al principio de respetar el interés superior del niño y su derecho a ser escuchados. Asimismo que evalúe –a través de Organismos Independientes- el concreto funcionamiento de la justicia de menores, especialmente en lo relativo a la discriminación de los jóvenes GLTTBI.
- Poner en marcha las acciones necesarias a fin de promover la sensibilización y capacitación de los profesionales y agentes de la salud –especialmente de aquellos que

¹⁴ CRC/GC/2003/5.

trabajan con adolescentes- sobre derechos sexuales y reproductivos con una perspectiva de diversidad de género y sexual, a fin de brindar atención e información adecuada para que todas/todos los adolescentes, puedan desarrollar su sexualidad de manera libre, digna y responsable. Asimismo, Impulsar a que el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de la Mujer e Instituto Nacional de la Juventud- incorporen en su programa “Hacia una Sexualidad Responsable” la perspectiva del derecho y la educación sexual contemplada dentro de la diversidad y exenta de prejuicios religiosos e ideológicos.

- Promover en los ámbitos de formación, educación y comunicación masiva programas y medios para brindar a niños niñas y adolescentes una educación basada en el respeto de los derechos humanos y por las libertades propias y del semejante.
- Tomar especialmente en cuenta las Observaciones Generales del Comité sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención de los Derechos del Niño,¹⁵ en tanto contienen conceptos y observaciones insoslayables sobre los derechos y garantías que deben procurarse a las/los adolescentes, especialmente en el ámbito de la salud y del desarrollo de sus potencialidades. Al respecto cabe citar un párrafo del citado documento que sintetiza en gran parte el basamento de las presentes recomendaciones: *“El Comité llama la atención de los Estados Partes sobre la Observación general N° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la que se dice que "los Estados Partes deben proporcionar a los adolescentes un entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva".*

Preguntas a formular al Estado Chileno

¹⁵ CRC/GC/2003/5.

- ¿Ha pensado el Estado Chileno cuales son las razones y variables que intervienen y han intervenido históricamente para que entre los grupos de adolescentes considerados vulnerables, el de la población GLTTBI resulta el más invisibilizado -y por lo tanto ignorado-, para tomar así medidas al respecto?
- ¿Cómo y cuándo evalúa el Estado Chileno el funcionamiento de la Justicia de Menores en todas sus instancias?
- ¿Qué programas y acciones ha encarado el Estado Chileno para concientizar a sus funcionarios, agentes educativos y agentes de salud en materia de salud y derechos sexuales –especialmente en adolescentes- tanto como sobre los contenidos y aplicaciones de la Convención?
- El Estado Chileno ¿ha considerado introducir políticas y modificar las existentes en función de eliminar las condiciones que llevan a la discriminación de las/los adolescentes GLTTBI en las esferas jurídicas, culturales y sociales?